Señores

JUZGADO CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

E. S.D.

Atn. Dra. Mayra Castilla Herrera
Juez

Asunto: Sustentación apelación.
Proceso: Declarativo verbal de menor cuantía
Demandante: Santiago Trillos Clavijo
Demandando: Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A.
Rad. 11001400301120220035000

LAURA MONTOYA OVIEDO, abogada en ejercicio, con domicilio y residencia en Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía N.º 1.015.439.695 de Bogotá y portadora de la tarjeta profesional N.º 296.748 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderada sustituta de **SANTIAGO TRILLOS CLAVIJO**, de conformidad con lo previsto en el artículo 322 del Código General del Proceso, respetuosamente sustento el recurso de apelación de la sentencia proferida por el Juzgado Once Civil Municipal de Bogotá en los siguientes términos:

1. En el numeral segundo literal c de la parte resolutive de la sentencia apelada, el A quo resolvió:

“Se niega el pedimento del literal D de la pretensión declarativa 1.4. conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia”

Con lo anterior, el A quo negó el reconocimiento de los intereses causados y pagados por valor de \$21.784.358, por utilización de la tarjeta de crédito en tanto que, de conformidad con lo señalado en la sentencia apelada, no se encuentran probados dado que la prueba de la causación de estos fue allegada a través de extractos bancarios los cuales se encuentran en inglés.

Fecha	Amortización	Interés	Total	TRM	Total COP
6/02/19	\$ 77,47	\$ 79,14	\$ 156,61	\$3.094,05	\$ 484.554
5/03/19	\$ 1.736,46	\$ 107,03	\$ 1.843,49	\$3.093,79	\$ 5.703.374
6/04/19	\$ 1.074,43	\$ 74,49	\$ 1.148,92	\$3.126,20	\$ 3.591.757
3/05/19	\$ 0,00	\$ 61,41	\$ 61,41	\$3.262,17	\$ 200.330
6/06/19	\$ 3.530,95	\$ 49,52	\$ 3.580,47	\$3.296,87	\$ 11.804.344
					\$ 21.784.358

2. A pesar de lo anterior, lo que, si fue reconocido por el Despacho en la sentencia, y se encuentra probado en el proceso, es la existencia del mutuo celebrado entre el

Demandante y Nicolás Trillos, el cual fue realizado a través de la utilización de la tarjeta de crédito.

3. Téngase en cuenta que, aun cuando los extractos hayan sido aportados en inglés no puede omitirse o excluirse en su totalidad la prueba documental, en tanto que gran parte de esta hace referencia en números, los cuales no varían dependiendo de inglés a español.
4. En todo caso, es un hecho notorio, que no requiere prueba, que toda tarjeta de crédito genera intereses, por lo que, es apenas lógico que, si fue otorgado el crédito a través de la utilización de la tarjeta de crédito, el deudor debe pagar no solo el capital sino el interés que este genere y, a pesar de que los extractos se encuentran en inglés, la tasa de interés cobrada se encuentra expresada en números.
5. Así las cosas, aun si en la sentencia apelada no se hubiera valorado el monto de los intereses del extracto aportado, lo cierto es que en una valoración integral de las pruebas aportadas dentro del proceso se debió reconocer, en uso de sus facultades, al menos los intereses causados con una tasa de interés cobrada en Colombia a las tarjetas de crédito, las cuales, por regla general se asimilan a la tasa de mora certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
6. Por otro lado, en el numeral tercero de la sentencia apelada el A quo resolvió:

“Negar la pretensión 1.5 de la demanda relativa al daño moral reclamado con forme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.”

7. La pretensión relativa al daño moral no fue reconocida en tanto que, en consideración del Despacho, no fueron acreditados dichos daños en el proceso.
8. Sin embargo, téngase en cuenta que no existe documental o prueba similar que pueda probar el sentimiento o aflicción sufrida o valor del daño extrapatrimonial, esta deberá tenerse por probada teniendo en cuenta las circunstancias propias que rodean los hechos de la demanda y las pruebas que se alleguen.
9. La Corte Suprema de Justicia ha señalado la integralidad de la indemnización así:

“Ello significa que el juez tendrá que ordenar al responsable del daño la reparación plena del mismo, que en materia contractual se traduce en el deber de colocar al deudor en la misma situación en que se habría hallado si el convenio se hubiera cumplido a cabalidad, lo cual supone restablecer tanto las condiciones económicas como las personalísimas que resulten afectadas con el incumplimiento.”¹

¹ Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil. SCIO297-2014. Rad: 11001-31-03-003-2003-00660-OI. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

10. Dicha afectación patrimonial aun cuando resulta evidente se puede tener por probada con lo afirmado por los testigos Nicolas Trillos y Mauricio Trillos y en el interrogatorio de parte practicado a Santiago Trillos, los cuales en ningún momento fueron debidamente desconocidos o refutados por la Demandada.
11. En todo caso, el daño extrapatrimonial y el sufrimiento sufrido por el Demandante es evidente y únicamente es necesario realizar una valoración de los hechos probados dentro del proceso para entender y tener por probada la zozobra e incertidumbre sufrido por el Demandante con ocasión del incumplimiento de Colsanitas en tanto que se tuvo que acoger a unas condiciones considerablemente inferiores a las pactadas en el contrato de medicina prepagada y, las cuales, en un contexto como el colombiano, en muchas ocasiones no resultan ser condiciones claras y suficientes para los tratamientos médicos requeridos.
12. La Corte Suprema de Justicia señaló que:

“La pauta de esta justa proporción la marca el criterio de razonabilidad del juez, pues es esa noción intelectual que le permitirá determinar en cada caso concreto si la medida de satisfacción que otorga en razón del daño a la persona es equitativa, suficiente, necesaria y adecuada para consolar a la víctima por la pérdida de un bien inestimable en dinero, para reivindicar su derecho fundamental y para reparar el agravio o la ofensa infligida a su dignidad.”²

13. Así las cosas, lo cierto es que el A quo debió realizar una evaluación justa y proporcional de las demás pruebas del proceso para determinar tanto la ocurrencia como la cuantificación del daño moral sufrido por el Demandante.

Atentamente,

LAURA MONTOYA OVIEDO
C.C. 1.015.439.695 de Bogotá
T.P. 296.748 del C. S. de la J.

² Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil. SCIO297-2014. Rad: 11001-31-03-003-2003-00660-01. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

Sustentación apelación. Rad. 11001400301120220035000

Información <info@jra.legal>

Mié 13/09/2023 16:31

Para: Juzgado 52 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j52cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Jose Luis Iriarte Diaz (Abogado Procesal III) <jliriarte@keralty.com>; Notificaciones Judiciales <notificajudiciales@keralty.com>; Marcelo Jimenez <marcelo.jimenez@jra.legal>; Laura Piedad Montoya Oviedo <laura.montoya@jra.legal>

📎 1 archivos adjuntos (108 KB)

2023-09-13 Sustentación apelación.pdf;

Señores

JUZGADO CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

E. S.D.

Atn. Dra. Mayra Castilla Herrera
Juez

Asunto: Sustentación apelación.
Proceso: Declarativo verbal de menor cuantía
Demandante: Santiago Trillos Clavijo
Demandando: Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A.
Rad. 11001400301120220035000

LAURA MONTOYA OVIEDO, abogada en ejercicio, con domicilio y residencia en Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía N.º 1.015.439.695 de Bogotá y portadora de la tarjeta profesional N.º 296.748 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderada sustituta de **SANTIAGO TRILLOS CLAVIJO**, de conformidad con lo previsto en el artículo 322 del Código General del Proceso, respetuosamente sustento el recurso de apelación de la sentencia proferida por el Juzgado Once Civil Municipal de Bogotá.

Atentamente,

LAURA MONTOYA OVIEDO
C.C. 1.015.439.695 de Bogotá
T.P. 296.748 del C. S. de la J.

JR&A
Jiménez Ruiz
& Asociados

T. +57 601 771 4432

Carrera 19 B No. 83-02 Of. 407
Bogotá, Colombia

www.jra.legal